JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D. C. veintiuno de marzo de dos mil veintitrés

<p>REF.: Tutela RAD.: 11001310302720230012500 De: Carlos Eduardo Ramírez López Contra: Policía Nacional - Grupo Reconocimiento Obligaciones Litigiosas y Jurisdicción Coactiva -.</p>

Superado el trámite que le es propio a esta instancia, se resuelve lo pertinente a la Acción de Tutela formulada por el señor CARLOS EDUARDO RAMÍREZ LÓPEZ.

ANTECEDENTES:

A través del escrito que fuera introductorio de la presente acción, se pretende se tutele en su favor el derecho constitucional de petición por considerar que ha sido vulnerado y amenazado, indicando que el 31 de enero de 2023 radicó en la Policía Nacional solicitud de notificación de cesión de derechos económicos reconocidos en sentencia del Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta y Tribunal Administrativo, en proceso de reparación No. 54001333300320140056200, siendo responsable Policía Nacional, y no ha recibido respuesta.

El juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta, señaló que: la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Eduardo Ramírez López contra la Policía Nacional, es por la omisión de dar respuesta de fondo, clara y precisa a la petición presentada el día 31 de enero de 2023, que consiste en el pronunciamiento de la cesión de derechos económicos reconocidos al en sentencias proferidas en virtud al control de reparación directa de radicado N° 5400133-33-003-2014-0056200 (01), confirmada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la que se declaró probada la falla en el servicio por parte del Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Manifiesta que no existe por ese Despacho proceder constitucional que genere reproche alguno dentro del trámite adelantado, ya que el actuar desplegado ha sido ajustado a la ley, no existiendo acción u omisión que vulnere o amenace derechos constitucionales.

La Policía Nacional guardó silencio frente a los hechos de la acción constitucional.

CONSIDERACIONES

El artículo 86 de la Constitución dispone que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar la protección de sus derechos fundamentales. Sin perjuicio de lo anterior, durante el desarrollo del proceso pueden desaparecer las circunstancias que dieron origen a la acción u ocurrir alteraciones fácticas que superen la pretensión de la acción, causando que la decisión pierda eficacia y sustento.

Por lo tanto, con sustento en los presupuestos fácticos esbozados, es necesario entrar a establecer si se vulneraron el derecho fundamental al derecho de petición, ante la falta de respuesta frente a la solicitud de envío del expediente digitalizado, lo cual solicita se ordene al juzgado 41 de Pequeñas Causas, dar respuesta.

El eje de la controversia en este caso que presenta la accionante, se centra en la respuesta al derecho de petición formulado el 31 de enero de los cursantes, basado en la espera sobre el pronunciamiento del trámite administrativo frente a la decisión emitida en sentencias por el Juzgado 3º Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta y Tribunal Administrativo, en proceso de reparación No. 54001333300320140056200.

Señala el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de la Carta Magna: "*Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela.*"

El artículo 6º del mencionado código, establece que las peticiones de carácter general o particular se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. "*Así mismo, prevé que, en ese mismo término, la administración debe informar al solicitante, cuando sea del caso, su imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, explicando los motivos y señalando el término en el cual se producirá la contestación. Norma que por lo general no se cumple en ninguna entidad, hecho se traduce en un desconocimiento del derecho de petición.*" (Sentencia T-076 del 24 de febrero de 1995).

Por lo tanto, y frente al silencio de la accionada en la presente acción, es necesario entrar a analizar la posible vulneración del derecho fundamental de petición.

DERECHO DE PETICION. Art. 23 de la Constitución Nacional dice: "*Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales*".

Encontramos que el derecho de petición para su vulneración se edifica en que no se ha obtenido respuesta a la solicitud presentada el 31 de enero de 2023, por la entidad accionada.

Corolario de lo expuesto se tiene, que ante la existencia de la transgresión o amenaza de los derechos fundamentales de la accionante, resulta procedente tutelar el derecho de petición vulnerado.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley

RESUELVE

Primero: **CONCEDER** el amparo constitucional al Derecho de Petición vulnerado por la entidad accionada **POLICÍA NACIONAL** - Grupo Reconocimiento Obligaciones Litigiosas y Jurisdicción Coactiva – al señor **CARLOS EDUARDO RAMÍREZ LÓPEZ**, cuyo derecho de petición ha sido vulnerado, conforme lo indicado en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: En consecuencia, se le **ORDENA** a la **POLICÍA NACIONAL** – Grupo Reconocimiento Obligaciones Litigiosas y Jurisdicción Coactiva –, que en el término de cuarenta y ocho (48) contados a partir de la notificación de este fallo, proceda a dar respuesta a la petición presentada por el accionante, la cual deberá ser comunicada al peticionario e informar a este despacho del cumplimiento.

Tercero: Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para lo de su cargo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

LA JUEZ.

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS

Firmado Por:

Maria Eugenia Fajardo Casallas
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 027 Escritural
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **821e9c333bb21e52ec4371c80f693b064b87735607cb363b7867e47e11bef0d7**

Documento generado en 21/03/2023 04:13:13 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>